



Memorias ... en CONSTRUCCIÓN

↘ LOS CONFLICTOS DE LA MEMORIA

Carolina Maillard

LOS CONFLICTOS CON LA MEMORIA

Carolina Maillard

¿Qué recordar? ¿Qué olvidar? Son las interrogantes planteadas en esta ponencia, y qué problemáticas deben enfrentar instituciones patrimoniales como las que integran la Dibam, para el desarrollo de políticas culturales de la memoria.

Hablar sobre política cultural de la memoria es discutir sobre qué recordar y qué olvidar. Cómo, quién o quiénes deciden qué es lo que hay que olvidar y qué recordar, y desde dónde se instala el poder para definir, para seleccionar y para nombrar aquello que vamos a nombrar. Son preguntas que surgen al pensar acerca de la política cultural sobre la memoria. Y también, el para qué queremos recordar o para qué queremos olvidar.

Como instituciones patrimoniales habitualmente nos hacemos estas preguntas. Para qué mostramos, para qué exhibimos, para qué seleccionamos libros, que es el ámbito en el cual trabajamos. Siempre se acostumbra decir que lo hacemos para el conocimiento de las generaciones venideras; para mantenerles un acervo del cual puedan después recordar, conocer, no volver a repetir historias, etcétera. Esas son las preguntas clave cuando pensamos una política cultural de la memoria. Y son aplicables a los hechos recientes, ya que estamos

- ▶ Antropóloga de la Universidad de Chile. Jefa de la Unidad de Estudios y Desarrollo Institucional de la Dibam.

en esta coyuntura con respecto a los 30 años del golpe militar. Esos cuestionamientos se extienden a hechos históricos, o a procesos e imágenes de más larga data, y que vuelven al presente sin mayores reparos. Por ejemplo, el conflicto mapuche y los problemas limítrofes.

No es fácil realizar una introspección institucional y formularnos preguntas respecto de las memorias que vamos a administrar, a las memorias suprimidas, o a las memorias emergentes. Es importante rescatar y destacar que la práctica más generalizada de las instituciones patrimoniales, o que instalan memoria, ha tenido más relación con un carácter de receptores de bienes culturales, y muy poco de productores. Habitualmente estamos más dispuestos a recibir ciertos bienes o patrimonios que otros deciden entregar y, por lo tanto, ahí hay una respuesta a las primeras preguntas acerca de quiénes son los que deciden qué vamos a instalar como memoria.

Quería leerles un par de citas que explican el tema en conflicto. Son opiniones dadas por los visitantes a los museos que dependen de la Dibam. Una persona dice: "La gente quiere ver un museo antiguo y quiere ver los mismos objetos que vio hace no sé cuánto tiempo. No quiere ver tanto plástico, y no quiere ver

tanta fotografía moderna. Quiere ver lo que vieron sus padres cuando chicos, lo antiguo". Otra cita: "Para mí la función de un museo no es solamente mostrar objetos antiguos. Para mí, específicamente, un museo debería ser una ventana por la cual uno accediera a determinadas áreas". Estas reflexiones, si bien pertenecen a un ámbito sumamente particular, el de los museos, nos aproximan a la temática sobre las políticas de la memoria. De un enfoque centrado en las disputas sobre la construcción de esas memorias, y quiénes participan en ellas.

Efectivamente, ambas opiniones se expresan desde un mismo lugar. Pero en la primera observamos una manera tradicional de abordar los temas sobre el pasado, el patrimonio y la memoria. Como algo perenne, legítimo, verdadero, incuestionable. Al contrario, la segunda cita obliga a pensar y comprender los hechos actuales y pasados desde las diversas ópticas. Lo más interesante es que nos insta a develar esas ópticas y a enriquecer las tradicionales miradas.

RE-INTERPRETAR SIEMPRE

Ahora bien, es cierto que las instituciones de la memoria, en las cuales se incluyen bibliotecas, archivos y museos, han preferido "cómodamente",

LOS CONFLICTOS CON LA MEMORIA

Carolina Maillard

así, entre comillas, trabajar sobre temas considerados cerrados a nuevas interpretaciones; supuestamente zanjados y consensuados como parte de la memoria colectiva de la nación, del pueblo, de la comunidad. Sin embargo, aquellos temas que hoy existen, que están presentes en las instituciones patrimoniales, si bien están dentro de un proceso de legitimación cultural y social, creemos que no por ello deben estar ausentes de sucesivas reflexiones y miradas. Ese es el deber, el compromiso que instituciones como las nuestras deben tener con respecto a una política cultural de la memoria.

El no zanjar, el no creer que los hechos, que las historias, que los procesos recientes y sus interpretaciones están cerrados. Cuando nos enfrentamos a procesos, a hechos pasados, lejanos y recientes, aparecen los conflictos, o el temor a ellos. No es malo que aparezca el conflicto, pero tenemos un poco de miedo a él. Hay temor a pensar distinto, a instalar interpretaciones diversas. Además, nos vemos en la obligación de tratar de mostrar una interpretación. Aquí se exige, nos exigen y exigimos el compromiso con una verdad, con una mirada, como si en la interpretación de estos hechos, del pasado reciente o lejano, sólo cupiera una. Por ello, nuestras instituciones más bien se han dedicado

a exhibir trabajos de la memoria legitimada por los medios tradicionales, tales como las escuelas, contribuyendo así a una consideración unívoca de la memoria, sin permitir la generación de discusión sobre estos aspectos. Ha sido una forma más cómoda, también, de mostrar, de exhibir, de seleccionar lo que no genera discusión, lo que se supone zanjado.

Una política sobre la memoria apela a definiciones institucionales, pero creemos que también puede permitir y garantizar la participación en su discusión de diversos agentes. Aquel es el papel de instituciones como las nuestras. Hay que invitar a diferentes agentes a la discusión sobre la memoria. Considerar a los especialistas y, a los profanos. Pero no sólo a ellos, además mirar al interior de las instituciones patrimoniales, a quienes trabajamos en ellas. Hay que instalar la idea que las memorias y los patrimonios son construcciones sociales y, por lo tanto, sujetas a disputas a nivel simbólico. Si trabajamos en el eje de la democracia cultural, la visibilidad de esas mismas disputas se constituye en un deber de develarlas, considerando y dejando muy en claro que la mirada que proporcionamos, que los resultados de la construcción de esas memorias, no es la única posible, sino que hay muchas más.

Para formar sociedades más democráticas en torno a la construcción de memoria se requiere instalar estos temas en el debate público. No son temas cerrados, o que un grupo de especialistas puede determinar qué es lo que vamos a mostrar, o qué vamos a hacer público. Más bien, hay que generar una esfera de discusión pública. A raíz de ello es que creemos que la memoria y, por lo tanto, la construcción de políticas sobre la memoria debe constituirse en discusiones. Tiene que existir en el diálogo social. No puede hacerse entre cuatro paredes. Así surge el concepto de conflicto, de disputa acerca de la construcción de las memorias, de los hechos, procesos e imágenes, tanto del pasado lejano como del presente. Así, también, emerge el mirar hacia las instituciones como la Dibam, que consciente o inconscientemente participa de dicha disputa.

Hay un rol de la sociedad civil. Es deber nuestro generar espacios de discusión sobre aquellas instalaciones de la memoria. Por ejemplo, muy pocas veces se discute acerca de lo que se está mostrando en el museo. Hay excepciones, claro. Fue lo que sucedió con los lentes del presidente Salvador Allende exhibidos en el Museo Histórico Nacional, o con una voz tímidamente alzada en el Museo de Temuco con respecto al conflicto mapuche. Si bien la ciudadanía

de alguna forma ha interpelado la construcción e instalación de esa memoria, ella no es casual. Los lentes de Allende nos remiten al pasado reciente, que aún no está consensuado, ni legitimado, ni discutido ampliamente. Lo mismo con el Museo de Temuco sobre la instalación de la memoria mapuche. Esa memoria sigue estando en construcción, no está muerta, no pertenece al pasado solamente, sino que es más presente que nunca. Por lo tanto, no es casual que en estos ámbitos se genere la discusión, pero no sucede lo mismo con otros, donde el pasado se supone que está mucho más cerrado y menos cuestionado. A nadie se le ocurriría alegar sobre la forma en que muestran el Combate Naval de Iquique, en un museo, porque se supone que es como es. No se discute.

Para terminar, la cultura y definición de una política de la memoria implica necesariamente el conflicto, mirado desde una carga positiva y no negativa. Enfrentar el pasado es desnudar el poder que ha construido ese relato. La posibilidad de construir políticas de la memoria pasa por generar espacios de participación para la discusión y disputa simbólica de ella.

COMENTARIOS

ALDO MARCHESI

El trabajo de Pedro Milos me resulta particularmente interesante. Da cuenta de ciertos problemas y tensiones que son comunes en el Cono Sur al trabajar sobre las temáticas vinculadas al pasado reciente. La idea de que la educación pueda ayudar a evitar la repetición de esa experiencia histórica de la que hablaba en los "Informes Nunca Más", y que hay que incluir esos contenidos a nivel educativo, tiene una consecuencia claramente positiva, pero, también, una serie de problemas. Muchas veces, ciertas cuestiones que se instalan en el sentido común de la práctica educativa y de la práctica de los historiadores, hacen que ese tema no camine.

Concretamente, el pensamiento más progresista en el ámbito educativo habla de él como un espacio de diálogo, donde el estudiante tiene algo que aportar. Se dice que los jóvenes tienen que saber lo que ha ocurrido, tienen que manejar la discusión sobre la multicausalidad de los procesos históricos, la diferente significación de los acontecimientos. Pero cuando un profesor de historia de secundaria empieza a hablar sobre este tema, dice lo que pasó, y que se debió a tal cosa, como si la multicausalidad es posible sólo en procesos históricos

lejanos. En los procesos más cercanos nuestras prácticas parecen ser más conservadoras y autoritarias.

En Uruguay y Argentina ha habido intentos de la sociedad civil por empezar a proponer el trabajo sobre esos temas a nivel educativo. Pero, muchas veces, lo que se instala es una suerte de contra discurso oficial. Frente a un discurso oficial, que trata de negar el tema, se plantea otra verdad, tan dura y absoluta, que en la práctica educativa genera serios problemas, ya que no se da cuenta de la diversidad, de la complejidad y la densidad de un proceso histórico.

Otra idea es la tensión entre Estado y sociedad. En Uruguay ocurrió que los docentes exigían constantemente incorporar la dictadura al currículo. Cuando se hizo, no sabían qué hacer, porque no estaban preparados en términos de formación y de elaboración académica. Hasta hoy ocurre que, si bien existen ciertas presiones del Estado, de hecho hay un marco que habilita que ese tema se trate en las clases, pero se hace muy poco. El tema es cómo la sociedad civil se prepara para ello. En el ámbito educativo, con la formación de los profesores, y en ámbitos colectivos, con talleres.

Está también la cuestión generacional. ¿Cómo es el debate intrageneracional? ¿Cómo se apropian las nuevas generaciones del pasado y del discurso del pasado que tienen las viejas generaciones? En el ámbito educativo como en el de los museos hay una apropiación constante, que trasciende la propia voluntad de los organizadores de las políticas de memoria. Muchas veces en un museo se desarrolla una propuesta que posee un objetivo específico y, tal vez, la forma en que las nuevas generaciones lean esa propuesta tenga muy poco que ver con las intenciones del museo. Lo mismo pasa en la práctica educativa, en el aula. No hay que pretender que las nuevas generaciones tomen un legado de las viejas generaciones. Lo que deben hacer es una apropiación crítica del pasado, y elaborarlo de acuerdo a sus necesidades del presente. En el caso uruguayo hay toda una cuestión sobre los museos como símbolos de la nación, y no como una apropiación crítica de ese espacio.

Otro elemento interesante es la cuestión del museo como un provocador, como una fuente de conflicto a nivel social. Veo una serie de problemas institucionales, tanto en Chile como en Uruguay. Y es que los museos son generalmente estatales, y por lo tanto, la pregunta es sobre qué grado de

autonomía hay para desarrollar políticas de provocación.

Por último, la relación entre sociedad civil y Estado. En el caso de Uruguay no hay relación, la sociedad civil hace una cosa y el Estado otra. En Argentina, hay articulaciones interesantes, por ejemplo, organismos de derechos humanos que trabajan con la provincia de Buenos Aires en experiencias de museos y de archivos. ¿Qué ocurre en Chile? ¿Todas las decisiones son netamente estatales, o hay un diálogo con actores de la sociedad civil?